
PUGNAS DISTRIBUTIVAS, PUGNAS DE PODER

David Ibarra
10 de diciembre de 1998

Finalicé una serie de artículos sobre el paquete financiero gubernamental que publicó meses atrás El Universal con las siguientes palabras: “La celebración de un acuerdo consensual sobre Fobaproa entre los partidos políticos, serviría de piedra de toque al propósito de avanzar en la adaptación del sistema económico al patrón de libertad de mercados y modernización democrática que nos demanda la historia universal. A partir de ahí, con menos escisiones y pugnas ideológicas, las fuerzas políticas del país podrían concentrar energías en finiquitar el proceso de transición y lograr el re acceso a desarrollos verdaderamente sostenidos. Aunque se ha avanzado lentamente, en zig zag, los resultados de las últimas negociaciones políticas son parcialmente alentadores, lo mismo en la materia del Fobaproa, que en el camino más largo y arduo de aprender a debatir, convencer, ceder hasta llegar a acuerdos democráticos, incluyentes, de corresponsabilidad compartida. Con todo, los tiempos del aprendizaje democrático, no siempre se compadecen de apremios económicos y sociales largamente larvados que nos colocan cerca del punto de crisis. Por eso, gobierno y fuerzas políticas de oposición bien podrían acercar, flexibilizar, posiciones en aras de un acuerdo que demanda con urgencia el país.”

Ya los tiempos políticos y económicos se agotan. La apremiante reforma del sistema financiero no ha rebasado siquiera el escalón del Fobaproa. Todavía no se examinan de fondo la reforma reconstructiva del sector financiero, riesgos relevantes como el de la extranjerización de los principales bancos del país o temas tan delicados como el de la selección de los centros decisorios de la política cambiaria. Más aún, el

álgido debate en torno al presupuesto y la miscelánea fiscal ha quedado superpuesto, complicándose y complicando aquel problema. La Secretaría de Hacienda y otros segmentos del gobierno paralizan tareas importantísimas, mientras se atienden a esos prolongadísimos debates.

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, partidos políticos no terminan por dejar atrás encono y críticas recíprocas para arribar a arreglos que, sin negar las posturas ideológicas de las partes, protejan el futuro del país, resguarden los intereses generales de la población.

Quiérase o no, estamos ahogados en pugnas distributivas y de poder que sitúan en segundo plano la solución de dilemas de enorme envergadura. Como ya se anticipa, inmersos en un receso económico que hará crecer el ingreso nacional de modo insuficiente el próximo año, los diversos agentes económicos se aprestan a defender su tajada en el trabajo de todos y, si posible, acrecentarla a costillas de los demás. El gobierno desea elevar impuestos, los empresarios se niegan a aceptarlo, y hasta piden incentivos renovados a la inversión. Los trabajadores, debilitados por la marginación, el ajuste y el desempleo, luchan por frenar nuevos retrocesos en la capacidad de compra de los salarios.

Es cierto que la carga impositiva en México es baja, como también que la modernización del país exige acrecentar, en vez de constreñir o diferir, el gasto en formación de capital humano y físico. Se exageran los méritos de la estabilidad de precios sobre otras metas de la política económica, y se instrumentan una y otra vez, medidas recesivas que alejan más y más el empleo pleno de nuestra fuerza laboral. Los trabajadores y clases medias están hartos de dos décadas en que día con día se empobrece y empequeñece el horizonte de su futuro y de sus familias. Y no menos

evidente es la situación apremiada del grueso de los empresarios, sobre todo los medianos y pequeños. Aparte de la abrupta apertura externa y la ausencia de políticas de reconversión productiva que les preparasen a la competencia externa, las altas tasas de interés, la cerrazón del crédito y la frecuente apreciación del tipo de cambio, les drenan ventas y recursos, colocándoles en posición de iliquidez. Suele suceder, entonces, que deba elegirse entre pagar la nómina, cubrir adeudos al fisco o servir la deuda con los bancos.

Todos, trabajadores, empresarios, gobierno, tienen parte de la razón. Sin embargo, es poca la energía dedicada a saltar por encima de las tensiones distributivas anotadas para asumir responsabilidades compartidas en el desarrollo y en distribuir con equidad los costos de lograrlo.

Para bien o para mal, en el ámbito político, se reproducen circunstancias análogas, acentuadas por un futurismo electoral desatado. Gobierno y PRI buscan resguardar la pureza del modelo económico, sin medir bien los costos en términos de legitimidad, debilitando a un partido que tiene la importantísima función de servir de eje moderador de los extremismos y también intentan --acertada o equivocadamente-- salvar obstáculos que, se postula, nos harían caer en otras crisis de fin de sexenio.

El PAN cuya dirigencia pareciera estar de acuerdo con los lineamientos centrales del presupuesto y del paquete financiero gubernamentales, enfrenta resistencias internas de legisladores y adherentes preocupados por los resultados de votaciones recientes y sus posibles efectos en la campaña presidencial que se avecina. Por eso y con el afán de poner distancia con el gobierno, fijan como condición al acuerdo económico la renuncia del gobernador del Banco de México y de otros funcionarios. Se acusa a Guillermo Ortiz de violar normas consagradas en nuestra

carta magna durante su gestión en la Secretaría de Hacienda. Dilucidar esa cuestión exige de pruebas y sólo puede hacerse mediante juicio constitucional, garantizando el derecho a la defensa. De otra suerte, se violentarían las causales de remoción de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México señalados en el artículo 43 de su ley orgánica, con lesión del régimen de autonomía de la institución. Aun frente a esos antecedentes políticos, causa extrañeza que un partido histórica y honrosamente legalista, “opte --como señala Castillo Peraza-- por presionar políticamente para lograr, sin juicio ni audiencia, una sentencia política condenatoria sin que medie proceso jurídico.”

De su lado, el PRD por decisión propia se ha excluido del Grupo de Alto Nivel encargado de negociar el paquete financiero, en parte como respuesta a un posible arreglo PAN-Gobierno que lo convertiría en convidado de piedra, y también por evidentes razones político-electorales que le brindarían una posición privilegiada en la próxima lucha electoral.

Incuestionablemente sobran razones justificativas que llevan a las distintas fuerzas políticas a aprovechar coyunturas y guardar prudente distancia de medidas que se perciben como de corte impopular.

Y, sin embargo, hay un olvido, un componente faltante en la tarea de convenir el diseño y compartir las responsabilidades del perfeccionamiento de nuestra vida económica y política. El juego democrático puede verse como el medio de acceder al poder con el respaldo de la mayoría. Pero eso no excluye la búsqueda incesante de respuestas que lejos de poner en riesgo, aseguren el bienestar general y destierren peligros inminentes, como los que hoy nos amenazan. Respetar en profundidad el estado de derecho, compartir con equidad los costos de nuestra doble modernización,

democrática y económica, solucionar apremios críticos, son tareas que hoy por hoy debieran conducir, por encima de cualquier consideración, a construir los consensos de que carecemos.

Para nuestra mala fortuna, más que dirigirse a ensanchar el producto a repartir, las energías de tirios y troyanos se enfocan a cambiar la distribución estática de lo que ya se tiene. Y, por igual, en materia política más que avanzar en profundizar las responsabilidades sociales de la democracia, se insiste en debilitar a ultranza a los opositores de la justa electoral. Quizás sea hora de dar vuelta a la página, ver menos hacia atrás y encarar en armonía, con agravios superados, la construcción del futuro nacional.